



OPINIÓN

Parásitos

Durante la campaña presidencial, Cristián Valenzuela, coordinador de asesores del Presidente, calificó de "parásitos" a quienes trabajan en el Estado. "Miles de millones de pesos terminan diluidos entre asesores, operadores y consultorías inventadas", dijo.

Ahora él es el empleado público, no solo uno de aquellos asesores, sino que el jefe de muchos.

Entre sus responsabilidades están afinar la comunicación y ajustar la estrategia. A la luz de los complejos momentos que vivió el Gobierno la semana pasada, habría que preguntarse si efectivamente está haciendo su pega. Según dirigentes republicanos, no. Ha recibido el fuego amigo.

A ello se suma la acción de la Contraloría que solicitó un sumario a quienes promovieron la idea de que el Estado de Chile estaba quebrado.

Y en apenas 45 días, 19 seremis renunciaron, evidenciando agudas

fallas en la selección de personal.

Dado lo anterior, correspondería ser duramente críticos del trabajo realizado por el influyente asesor y sus colegas.

Sin embargo, el contenido de los oficios de la Dipres, enredando al Gobierno en múltiples explicaciones, no es un "problema comunicacional". Lo que revela es otra cosa: un propósito no declarado del Gobierno, una agenda oculta, destinada a reducir drásticamente y rápidamente el tamaño del Estado.

Cortar programas públicos, traspasar sin gradualismo a la ciudadanía el alza de combustibles, proponer una agenda legislativa que mezcla una reforma tributaria tendiente a un Estado

mínimo con otras iniciativas de difícil rechazo, son medidas que dan cuenta de hacia adónde apunta su programa.

Visto así, el Segundo Piso no habría fallado. Simplemente, estaría llevando adelante la convicción que los guía. El tema es que el Gobierno no ha querido asumir frontalmente ante el país que ese es su plan.

Es cierto que el Presidente ha perdido 17 puntos de adhesión en seis semanas (Cadem), pero ese daño todavía puede ser interpretado como un costo natural de la magnitud de la refundación.

Todas las candidaturas presidenciales, incluida la de Evelyn Matthei, plantearon que reducir los seis mil millones de dólares de

gasto fiscal propuestos por Kast era un anuncio imposible de cumplir. La pelea Poduje-Quiroz ratifica las dificultades políticas de llevar esta meta adelante y los decretos de Dipres, privados pero oficiales, demuestran que no es posible hacerlo sin recortar beneficios sociales.

Bajar impuestos sin compensación adecuada es un riesgo fiscal relevante hacia el fu-

turo. Puede considerarse incluso irresponsable, pero los autores lo sustentan en un acto de fe: el crecimiento futuro.

Aunque no se comparte esa idea, se puede entender. Pero hay otras propuestas en la ley miscelánea que son disparatadas. Quitar el pago de contribuciones a quienes pueden so-

bradamente pagarlas es una de esas. Otra es la inviolabilidad tributaria

aplicada a proyectos a partir de 50 millones de dólares. La inviolabilidad puede ser necesaria para algunas inversiones de largo retorno, pero no puede asumirse como norma general. Prácticamente, la totalidad de la riqueza no minera del país creada en democracia se hizo sin la utilización de este principio.

La guinda de la torta es la idea de traspasar mil 500 millones de dólares a beneficios tributarios para empleo, lo que no garantiza la creación de ningún empleo nuevo. Es sólo una manera cara de financiar planillas laborales sin focalización, generando riesgos de fraude moral y distorsión del mercado laboral.

En resumen, desde el Segundo Piso deben estar nerviosos, porque están cuestionados. Pero llevan el barco en la dirección que quieren en su pensamiento profundo. De eso no cabe duda. Aunque la ciudadanía, según las últimas encuestas, perciba el futuro cada vez con mayor pesimismo. ■



EL SEGUNDO PISO NO HABRÍA FALLADO. SIMPLEMENTE, ESTARÍA LLEVANDO ADELANTE LA CONVICCIÓN QUE LOS GUÍA. EL TEMA ES QUE EL GOBIERNO NO HA QUERIDO ASUMIR FRONTALMENTE ANTE EL PAÍS QUE ESE ES SU PLAN.

RICARDO SOLARI